

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

ADVERTENCIA OFICIAL.

Las leyes y disposiciones generales del Gobierno, son obligatorias para cada capital de provincia donde se publican oficialmente en ella, y desde cuatro días después para los demás pueblos de la provincia. (Ley de 28 de Noviembre de 1857.) Las disposiciones de las autoridades, excepto las que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán oficialmente, como asimismo cualquier anuncio concerniente al servicio de la Nación que dilmine de las mismas, pero los de interés particular pagarán su inserción, entendiéndose en este caso con el Editor del Boletín.

SE PUBLICA TODOS LOS DIAS EXCEPTO LOS DOMINGOS.

PRECIOS DE SUSCRICION.—En Orense, por trimestre, 7 pesetas.—Para fuera de esta capital, franco de porte, por trimestres adelantados, 8 pesetas.—Números sueltos, 38 céntimos. Se suscribe en esta capital, Imprenta de José M. Ramos, Colon, número 16.—En las demás provincias, en las principales librerías.

PRIMERA SECCION.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA

DEL CONSEJO DE MINISTROS

S. M. el Rey (Q. D. G.) y Su Alteza Real la Serma. Sra. Princesa de Asturias continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud. De igual beneficio disfrutan Serenísimas Señoras Infantas Doña María del Pilar, Doña María de la Paz y Doña María Eulalia.

MINISTERIO DE ULTRAMAR.

A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y en virtud de autorización que otorga a mi Gobierno el art. 89 de la Constitución de la Monarquía,

Vengo en decretar lo siguiente: Artículo 1.º El Código penal promulgado de 17 de Julio de 1870 publicará y observará desde su publicación en los territorios jurisdiccionales de las islas de Cuba y Puerto Rico, con las modificaciones propuestas por la Comisión que ha tenido este encargo.

Art. 2.º Del mismo modo se publicará y observará en las islas que se refiere el artículo anterior, la ley provisional de Enjuiciamiento criminal para la aplicación de dicho Código, con las alteraciones propuestas por la citada Comisión.

Art. 3.º El Gobierno dará cuenta a las Cortes de este decreto de las leyes modificadas que por

el mismo se aplican a las provincias de Ultramar.

Dado en Palacio a veintitres de Mayo de mil ochocientos setenta y nueve.—Alfonso.—El Ministro de Ultramar, Salvador de Albaladejo.

INFORME

DE LA COMISION REMITIRINDO EL PROYECTO DE CODIGO PENAL.

Excmo. Sr. Ministro.

La Comisión nombrada por decreto de 9 de Febrero de 1874 tiene la honra de poner en manos de V. E. el proyecto de Código penal para las islas de Cuba y Puerto Rico, juntamente con el de una ley provisional adjetiva para la aplicación de las disposiciones del mismo Código.

V. E. que, con gloria suya y provecho del país, ha sido Vocal de esta Comisión hasta el día, no lejano, en que S. M. el Rey (que Dios guarde), se dignó elevarle a los Consejos de la Corona, no ha menester ciertamente una exposición detallada de los motivos en que se fundan las reformas introducidas en el texto del Código penal vigente en la Península. Así, pues, solo para el efecto de que en todo tiempo conste el criterio que la Comisión ha aplicado a la reforma, a fin de que no se nos haga responsables de todas y cada una de las soluciones que el proyecto da a los múltiples, intrincados y trascendentales problemas de la ciencia penal, nos permitiremos consignar algunas sencillas observaciones que pongan de relieve el espíritu que ha presidido a nuestras asiduas tareas.

La Comisión debía comenzar por establecer con toda claridad y

precisión la naturaleza y extensión de su encargo. Estaba llamada a reformar el Código penal vigente en la Península bajo el punto de vista de los principios de la ciencia y de los datos y enseñanzas que ha suministrado su aplicación por los Tribunales penales desde el año de 1870. No su misión era sin duda mas modesta, a juzgar por los términos del decreto de su creación. Había sido encomendado por el Gobierno la tarea de proponer en nuestro Código penal las reformas necesarias para su planteamiento en Cuba y Puerto Rico, y de esta creación parecía inferirse lógicamente el deber de respetar el texto vivo en la madre patria, no alterándole ni modificándolo sino en cuanto lo exigiesen imperiosamente las condiciones especiales de nuestras provincias ultramarinas. Cualquiera duda sobre este punto habría quedado disipada al promulgarse la nueva Constitución, toda vez que, según su art. 89, el Gobierno solo está autorizado para aplicar a las islas, aunque con las modificaciones convenientes, las leyes promulgadas o que se promulguen para la Península.

Delimitadas de esta suerte las atribuciones de la Comisión, su trabajo, sin ser fácil ni llano, era de cierto mas breve y menos complicado y expuesto a una rescisión de pareceres entre sus Vocales. De haber tenido libertad absoluta en la reforma, no habría faltado quizá alguno que hubiera abogado por la abolición de la pena de muerte y las perpétuas, o su aplicación a muy reducidos casos, y por el establecimiento del Jurado; y aunque disintiendo otros de este

parecer, de seguro todos habríamos coincidido en la idea de simplificar las escalas de la penalidad acentuando el carácter correccional del castigo, sin despojarlo no obstante de sus dos elementos esenciales, la expiación y la ejemplaridad, y dando en su virtud a la prisión la importancia que ha adquirido, merced a los modernos estudios penitenciarios; mientras que, partiendo del respeto a la legislación peninsular, e inspirándonos en el sentimiento de la patria y en el espíritu gubernamental que infunden siempre la práctica de los negocios y el ejercicio del poder, hemos logrado encontrar en todas las cuestiones fórmulas razonables de transacción, y se ha dado el espectáculo, por todo extremo raro y altamente disonante, de una perfecta unanimidad en todos los acuerdos de la Comisión a pesar de estar afiliados sus Vocales a sistemas jurídicos distintos y a escuelas políticas opuestas.

Algun mérito tiene y alguna autoridad presta a nuestro proyecto esta unanimidad en las votaciones, sobre todo si se toma en cuenta que, no por nuestra voluntad, sino impelidos por los cambios que ha sufrido nuestra legislación en los últimos tiempos, nos hemos visto obligados a hacer dos excepciones a la regla de conducta que nos habíamos trazado, redactando de nuevo un capítulo entero y muchos artículos de otros, que representan problemas asaz delicados y trascendentales.

Nada hay que apasione tanto a los hombres como lo que se relaciona con sus creencias religiosas; y sin embargo, en este punto la Comisión no tenía modelo que se-

guir ni texto que respetar en ninguno de los (óligos penales que han regido hasta aquí en España. El de 1848, reformado en 1850, estaba calcado en la unidad católica, sancionada por la Constitución de 1845. El de 1870 había desenvuelto en sus artículos la libertad absoluta de cultos, establecida por la Constitución de 1869. Y, desviándose de uno y otro sistema la ley fundamental vigente, se limita á amparar y proteger la tolerancia religiosa. Por consiguiente, aparte las modificaciones que exige en el Código el estado social de Cuba y Puerto-Rico, era indispensable ponerle en perfecta armonía con el art. 11 de la Constitución de 1876. A V. E., que fué el Ponente de ese capítulo, corresponde en primer término la gloria de haber hallado fórmulas aceptables para todas las opiniones en el seno de la Comisión; á los demás nos basta que se reconozca la rectitud con que hemos procedido, prescindiendo cada cual de sus aspiraciones é ideales en cuestión que tan hondamente divide á las escuelas políticas á que pertenecemos, ojalá afiliados, y concretándonos pura y simplemente á desenvolver en el proyecto del Código, sin pasión y con rara lealtad, el espíritu y la letra del precepto constitucional.

Lo propio ha sucedido respecto de los muchos artículos que más ó menos directamente se rozan con el ejercicio de los derechos individuales. Reconócelos sin duda; y muy explícitamente, como derechos naturales del hombre que la ley escrita está obligada á respetar, la Constitución de 1876, pero no en los términos absolutos que la de 1869; antes bien consigna en su artículo 14 que el derecho del individuo y el del Estado se condicionan y limitan recíprocamente. Y por más que la justicia obligue á declarar en honor de sus autores, que el Código penal de 1870 había provisto al poder público de las armas que ha menester para la defensa y conservación de la sociedad, al cabo no podía menos de reflejarse en él el principio constitucional que informaba sus preceptos. Ha sido, pues, preciso alterar en nuestro proyecto la redacción de varios artículos del Código, poniéndolos en consonancia con las prescripciones de la ley fundamental. Nuestra misión y el propósito del Gobierno eran hacer

extensiva á las provincias de Ultramar la legislación vigente en la Península, y es obvio que lo que hoy rige entre nosotros es el Código penal de 1870, en cuanto no ha sido derogado ó modificado por la Constitución, la cual está muy por encima de las leyes ordinarias y de las orgánicas.

Fuera de las modificaciones imperiosamente reclamadas por el cambio de legislación en la Península, la Comisión se ha limitado á introducir en el texto del Código penal de 1870 las variantes que aconsejan las condiciones locales de Cuba y Puerto-Rico. Para desempeñar con el posible acierto esta parte de su tarea, ha consultado cuidadosamente todos los antecedentes que existen en el Ministerio del digno cargo de V. E., habiéndole servido de mucho los notables trabajos de la Comisión nombrada por Real decreto de 29 de Setiembre de 1866, y presidida por el eminente jurisconsulto D. Cándido Nocedal. Ya en 18 de Setiembre de 1856 la Audiencia pretorial de la Habana indicó los inconvenientes de la falta de una regla fija en la aplicación de las penas por haber caído en desuso gran parte de la legislación criminal; y con el deseo de uniformar en lo posible la jurisprudencia de las Antillas con la de la Metrópoli, anunció respetuosamente al Gobierno que era llegado el caso de examinar si convenía ó no la aplicación del Código penal á la isla de Cuba. Iniciado el oportuno expediente, el Ministerio fiscal opinó por la afirmativa; mas no así la Comisión que se nombró del seno del Real Acuerdo, la cual, reconociendo que el Código penal vigente en la Península era un monumento de sabiduría para una población homogénea, sostuvo, entre otras cosas, la necesidad de mantener la pena de azotes para la raza de color, así como también la de trabajos fuertes en fincas de campo que los Juces y Tribunales solían imponer entonces á los esclavos y colonos chinos.

Más tarde, y por consecuencia de una Real orden trasmitida por el Capitán general de la isla de Cuba en oficio de 12 de Enero de 1860, recibieron nuevo impulso los trabajos iniciados en 1856, y el esbozo é ilustrado funcionario que á la sazón ejercía el cargo de Fiscal, en un informe notable

bajo muchos aspectos, protestó contra la bárbara pena de azotes; pidió la igualdad ante la ley, no solo en la apreciación de los delitos y la imposición de las penas, sino también en la manera de cumplir éstas, destinando á los penados á unos mismos establecimientos sin consideración alguna á su distinta condición ni á la diferencia de razas, y en suma, se declaró sin vacilar por el planteamiento del Código vigente en la Metrópoli, con escasas variantes, caminando resueltamente á la asimilación de las Antillas con la madre patria. Dictamen tan radical para aquel tiempo no podía menos de suscitar, como en efecto suscitó, vivas y apasionadas controversias en los centros administrativos, hasta que, llevada la cuestión al Consejo de Estado en pleno, este alto Cuerpo, presidido á la sazón por el Sr. Duque de Rivas, rechazó casi unánimemente las ideas reformistas del Fiscal.

De entonces acá, Excmo. señor, estas han ganado mucho terreno: la información decretada por el Sr. Cánovas del Castillo en 1865, la ley de 4 de Julio de 1870 sobre abolición de la esclavitud, el principio proclamado así por la Constitución de 1869 como por la de 1876, el desenlace de la guerra que por tantos años ha ensangrentado el suelo privilegiado de las más preciosas de nuestras Antillas, y en una palabra, la sustitución del régimen colonial por el de la asimilación de las islas de Cuba y Puerto-Rico á la madre patria, que hoy las considera como provincias españolas, han cambiado profundamente el aspecto de las cosas, y disipado las dudas que antes podían abrigarse acerca de la conveniencia de uniformar la legislación penal en todo el Reino. Aun sin tan trascendentales novedades hubiera opinado esta Comisión por aplicar á las Antillas el Código penal de la Península con contadas modificaciones, porque unos mismos Códigos han regido siempre aquí y allí hasta 1848, y porque nuestras sabias leyes de Indias ordenaban conservar esta uniformidad en la legislación y la jurisprudencia hasta donde lo permitieran las condiciones especiales de nuestras antiguas colonias. Constante aplicación han tenido en ellas, lo mismo que en la Metrópoli, el Fuero Juzgo, el Fuero Real, las Siete Partidas y la No-

visima Recopilación. La represión del tráfico de negros no tenía en Cuba y Puerto-Rico otra penalidad que la de la Península. Los bandos de buen gobierno y los reglamentos, que nunca pueden elevarse á la categoría de una ley penal, reducidos á medidas de orden, salubridad, comodidad y ornato público, han constituido acá y allá una legislación sustancialmente uniforme desde los tiempos de la conquista, sin que para ello haya ofrecido el menor obstáculo la existencia de la esclavitud y de las razas de color. Aquellos Códigos, sin embargo, ya muy antiguos, se resienten, como es natural, del atraso, de la rudeza de costumbres y de las preocupaciones de la época en que respectivamente fueron redactados, y á su falta de una buena definición y clasificación de los delitos y de la responsabilidad de sus agentes, y sobre todo al extremo rigor y desproporción de las penas, se ha debido sin duda el que cayeran en desuso lo mismo en Ultramar que en la Península, entronizándose en el seno mismo de la administración de justicia la anarquía, afortunadamente moderada por el prudente arbitrio de los Tribunales. Pero no hay prudencia que baste á suplir el suave imperio de la ley, ni razón suficiente á cohesionar la violación de un principio sacratísimo, que constituye una de las más grandes conquistas de los tiempos modernos, es á saber: que nadie puede ser castigado sino con la pena y por el Juez establecidos con anterioridad al delito.

Decidida, pues, la Comisión á respetar las bases, el método y la redacción del Código penal de 1870, y puestos ya en armonía varios de sus artículos con las prescripciones de la ley fundamental vigente, su tarea estaba reducida á introducir en él las variaciones que reclamaban las condiciones locales de Cuba y Puerto-Rico. La distancia á que se hallan estas islas del poder central, y el prestigio que tradicionalmente goza y de que tanto ha menester el Gobernador general, no permitían colocar á este al nivel de los Gobernadores de las demás provincias del Reino: la más vulgar prudencia aconsejaba, de acuerdo con la tradición y las costumbres, amparar su autoridad en determinados casos con sanciones analógicas

las que en la Península protegen la del Supremo Gobierno. En esta posición razonable se fundan ciertas variantes que hay en nuestro proyecto.

Algunas hay también debidas a la posibilidad en que se hallan de cometer ciertos delitos los habitantes de las islas, separados como están por el mar del Palacio del Monarca y de los del Senado y del Congreso. Para su ejecución tendrían que venir a la Península y obvio es que quedarían sujetos a nuestro Código desde el punto y hora en que pusieran el pie en el territorio peninsular.

Otras obedecen a la diferencia del clima, como por ejemplo, la del art. 102 que no reconoce otro motivo que la mayor intensidad del calor y de su fuerza de descomposición en los países tropicales.

Por último, y para abreviar, las alteraciones principales tienen su origen y fundamento en la esclavitud que, abolida en Puerto-Rico, subsiste todavía, aunque temporalmente, en la isla de Cuba; á mas de que, al desaparecer esta institución secular, tan contraria á la fraternidad humana que vino á enseñar el cristianismo y, condenada por los progresos de la filosofía y de la historia, no puede menos de dejar impresa su huella durante un largo período en las costumbres y en las leyes, á causa de las relaciones inevitables entre los antiguos amos y los libertos. Inexcusable falta en verdad la falta que cometería el legislador no preparando convenientemente la transición de la servidumbre á la libertad.

Se continuará.

(Gaceta núm. 150.)

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REALES ORDENES.

Vista la instancia del Médico-Director del establecimiento balneario de Valle de Rivas, en solicitud de que se amplie la temporada oficial de los mencionados baños, fijando su principio el día 1.º de Julio, en vez del 15.

Resultando que las condiciones climatológicas de la localidad permiten el uso de las aguas en los primeros días de Julio, por lo que acuden desde dicha época muchos enfermos, deseosos de disfrutar de la benéfica influencia de las aguas y el clima.

Resultando que el propietario en su informe no opone ninguna razón á las alegadas por el Médico-Director, y pide á la Administración que resuelva lo mas acertado.

Considerando que en otros establecimientos balnearios situados en la misma región, empieza la temporada oficial el día 1.º de Julio:

Considerando, por último, que es conveniente armonizar las temporadas oficiales de todos los establecimientos situados en la misma zona,

S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido resolver, de acuerdo con lo informado por el Real Consejo de Sanidad, que la temporada oficial comprendida desde el 15 de Julio á 15 de Setiembre, que ha venido rigiendo hasta el día, se varíe para lo sucesivo, dando principio en 1.º de Julio y terminando en 15 de Setiembre.

De Real orden lo comunico á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Mayo de 1879.—Silvela.—Sr. Gobernador de la provincia de Gerona.

En vista de la instancia elevada á este Ministerio por D. Isidro Pandal, Médico-Director de los baños de Mondáriz, en esa provincia, solicitando que la temporada oficial que rige en dicho establecimiento de 1.º de Junio á 30 de Setiembre, se varíe, fijando como período del 20 de Junio á 30 de Setiembre:

Resultando de lo expuesto por el Director y de lo informado por la propietaria y el Gobernador de la provincia, que una de las fuentes minerales, por su poca altura sobre el nivel del río Geca, está inundada la mayor parte del invierno, y que las lluvias no cesan por regla general hasta la primera quincena de Junio:

Considerando que la temporada oficial de los baños de analoga situación isotérmica no comienza hasta el día 1.º de Julio; y

Visto el art. 22 del reglamento de baños y aguas minero-medicinales vigente;

S. M. el Rey (Q. D. G.), de acuerdo con lo informado por el Real Consejo de Sanidad, se ha servido disponer que la temporada oficial comprendida desde 1.º de Junio á 30 de Setiembre, que ha venido rigiendo hasta el día, se varíe para lo sucesivo, dando principio en 20 de Junio y terminando en 30 de Setiembre.

De Real orden lo comunico á V. S. para su conocimiento, el de

los interesados y demás efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Mayo de 1879.—Silvela.—Sr. Gobernador de la provincia de Pontevedra.

(Gaceta núm. 151.)

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

REAL DECRETO.

Vista la exposición elevada por la Sala de lo criminal de la Audiencia de Barcelona en que, conforme á lo dispuesto en el artículo 2.º del Código, propone que la pena de siete años y tres meses de presidio correccional á que fué condenado Antonio Ferrer Roca en causa por tres delitos de robo se le commute por la de dos años y cinco meses de presidio:

Considerando que atendidos el

grado de malicia con que obró el reo y la cuantía de lo robado, que no excedió de 22 pesetas, resulta notablemente excesiva la pena impuesta:

Teniendo presente lo dispuesto en la ley provisional de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la gracia de indulto;

De acuerdo con lo consultado por el Consejo de Estado y con el parecer de mi Consejo de Ministros,

Vengo en conmutar la pena de siete años y tres meses de presidio correccional que se impuso á Antonio Ferrer Roca en la causa de que va hecho mérito por la de dos años y cinco meses, también de presidio correccional.

Dado en Palacio á veintinueve de Mayo de mil ochocientos setenta y nueve.—Alfonso.—El Ministro de Gracia y Justicia, Pedro Noláscio Aurioles.

ADMINISTRACION ECONOMICA DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Relación de los resguardos del Empréstito Nacional de 175 millones que se reclaman á esta Administración como extraviados pertenecientes á los sujetos cuyos nombres y demás circunstancias se expresan á continuación:

Ayuntamientos á que pertenecen los resguardos.	Nombre del contribuyente.	Número del resguardo extraviado.	Plazos.
Esgos.	D. Ramon Romasanta. D. Manuel Romasanta.	77 y 945 63 y 822	1.º 2.º 3.º 1.º 2.º 3.º

Lo que se hace público por medio de este Boletín oficial, á fin de que los tenedores de los resguardos á que se contrae la anterior relación, los presenten para su cange en esta oficina en el término de 30 días, en la inteligencia de que de no hacerlo así se darán nulos y fuera de circulación los indicados resguardos.

Orense 30 de Mayo de 1879.—El Jefe económico, Angel Guerra.

SÉTIMA SECCION.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA.

Por el presente exhorto á las Autoridades de la provincia y requiero á los individuos de la

policia judicial para que practiquen las más eficaces diligencias á conseguir el paradero y ocupación del dinero y alhajas que á continuación se expresan, robadas á Dona Angela Plata la madrugada del 17 de Febrero úl-

timo, poniéndolas si se hallasen a disposicion de este Juzgado con las personas que las tuvieron, a los efectos que en justicia haya lugar.

Noya, 25 de Mayo de 1879.—
Francisco Vazquez Quiroga.—
por su inandado, Pedro Dieste.

Alhajas robadas.

Cuatro mil reales en dinero.
Dos cubiertos de plata antiguos con las iniciales M. M.

Tres iden de plata nuevos con las iniciales G. M.

Un contador de madera de pino usada de 30 centímetros de largo 20 de ancho.

Uños pendientes de oro con unas piedras pequeñas de gancho, cortos, y con tres piernas, ignorándose su peso.

El Sr. Juez de este partido, en providencia de ayer dictada en sumario de causa criminal contra Francisco Diaz Mendez, vecino de San Martín de S. Payo, sobre intento de robo, acordó llamar por medio de la presente a Antonio Fernandez, vecino de dicho San Martín, soltero, labrador, de 27 años, a fin de que dentro del término de diez días, y bajo la multa de diez pesetas, comparezca ante este Juzgado con objeto de ampliar una declaración que prestó en dicha causa, prevenido que trascurrido dicho término sin verificarlo le parará el perjuicio que haya lugar.

Y en cumplimiento de lo mandado expido la presente que firmo en Orense a 30 de Mayo de 1879.—Benito D. Teixeira.

JUZGADOS MUNICIPALES.

Don Casiano Vazquez Feijóo, Secretario del Juzgado municipal de la ciudad de Orense.

Certifico: que en autos de juicio verbal recayó la sentencia que dice:

«En la ciudad de Orense a 29 de Mayo de 1879: D. Antonio Varela Vahamonde, Juez municipal con vista de estos autos de juicio verbal:

1.º Resultando que D. Manuel Rodriguez Iglesias, vecino de esta ciudad, como apoderado de D. José Rivas Quintela, contratista de sustitutos, propuso demanda contra Ramon Dieguez Incógnito, labrador y vecino de Penamá, municipio de Gómesen, sobre que le pagase la suma de 1.000 reales, impuesta como multa al que faltase a un contrato de sustitucion;

2.º Resultando que librado

exhorto al Juzgado de Gómesen de para la citacion del demandado y hecha esta por cédula, no compareció al juicio, y a instancia del actor se le declaró rebelde;

3.º Resultando que en trámite de prueba se presentó y unió a los autos el contrato simple otorgado en esta ciudad en 28 de Febrero último entre el Quintela y el Dieguez, comprometiéndose este a sustituir en el Ejército de Ultramar a la persona que le designase aquel, siempre que se le abonasen 4.000 reales al otorgar la escritura judicial de compromiso, condicionando que el que faltase abonaría al otro por vía de multa la suma de 1.000 reales, cuyo contrato aparece reconocido por los dos testigos que lo suscribieron Manuel Rodriguez y José Gonzalez, sin que se presentase a declarar el otro testigo José Ramon Veloso, y atendiéndose a la vez la declaración de aquellos a justificar que el Ramon Dieguez habia faltado al cumplimiento de la obligacion de sustitucion mencionada:

1.º Considerando que por los dos expresados testigos se comprueba la autenticidad del documento base de la demanda, y la falta a lo estipulado en el mismo por parte de Ramon Dieguez, incurriendo en la condicion penal que para el caso se hallaba impuesta;

2.º Considerando que la incomparecencia del demandado, demuestra tambien, siquiera sea implícitamente, que no le asisten excepciones atendibles, y le hace responsable a las costas.

El repetido Sr. Juez por ante mi Secretario dijo: que debia condenar y condenaba al Ramon Dieguez a que pague a D. José Rivas Quintela, o su apoderado, las 250 pesetas a que le obliga la condicion penal estipulada en el contrato citado y en las costas. Así por esta sentencia que se notificará en estrados y en el Boletín oficial de la provincia lo pronuncio, manda y firma de que certifico.—Dr. Antonio Varela G. Vahamonde.—Casiano Vazquez.

Y para su insercion en el Boletín oficial se libra el presente en Orense a los mismos 29 de Mayo de 1879.—Casiano Vazquez Feijó.—V.º B.º—Dr. Antonio Varela G. Vahamonde.

ANUNCIOS.

GUIAS PARA CABALLERIAS.

—En la imprenta de José Manuel Ramos, calle de Colon número 16, se hallan a la venta dichos impresos.

Estas guias, además de ser obligatorias a todo traficante, según Real orden de 8 de Setiembre del año último, evitan toda clase de responsabilidad que pudiera caber a cualquier persona por hallarse en su poder una caballería que hubiese sido robada, para lo cual todo comprador debe exigir del vendedor el citado documento autorizado en forma.

OBRAS DE

DON EUSEBIO FREIXA Y RABASO,
DE QUE HAY EXISTENCIAS EN ORENSE
PARA LA VENTA.

GUÍA TEÓRICO-PRÁCTICA

DE

CONTABILIDAD MUNICIPAL

Y

PARTIDA DOBLE.

CONTIENE:

Un libro diario de Intervencion con su correspondiente libro borrador; otro mayor o de cuentas corrientes; otro de balances mensuales de comprobacion y otro de Caja de la Depositaria, con los asientos desde 1.º de Julio en que empieza el ejercicio del Presupuesto hasta el 31 de Diciembre del año inmediato, en cuyo día se cierra definitivamente, basado en uno que se incluye con mas de cien notas aclaratorias de todos los artículos del mismo; cuentas de caudales y cuenta de contribuciones, ambas documentadas convenientemente; un Presupuesto adicional; balances, liquidaciones y otros estados de gastos e ingresos, nacido todo de la cuenta y razon de los libros antes citados; una relacion extensa y circunstanciada de cuanto se refiere a la Hacienda municipal y funcionarios que en ella intervienen, e igualmente de la contabilidad, teneduría de libros, origen, historia y desarrollo de la Partida doble, explanando sus principios fundamentales y clases de asientos; con gran número de demostraciones prácticas, tanto para el comercio como para la administracion de los pueblos; un expediente de secciones y sorteo para la formacion y constitucion de junta municipal; y otro de reduccion, discusion y aprobacion del Presupuesto, un resumen del mismo que se remite al Gobierno por conducto de los Gobernadores respectivos; expediente de Presupuesto y cuenta mensual del menaje y objetos de enseñanza como deben rendirse por los Maestros, y asimismo del estado de fondos realizados, cada tres meses; Presupuesto de obligaciones carcelarias, distribucion mensual de fondos; estado trimestral de recaudacion e inversion de los del Presupuesto del Ayuntamiento, libro de actas de arcos, inventario de fincas rústicas y urbanas, productos, impuestos y arbitrios; testimonio que se envia cada tres meses a la Administracion económica de los propios y montes, etc., etc.

Cuesta 3 pesetas 50 céntimos.

GUIA DE CONSUMOS.

8.ª EDICION.

Su precio 2 pesetas.

Se venden aquí sin aumento de precio.
—Orense: San Francisco.—José María Novoa Alvarez.

IMPUESTO

DE

CONSUMOS, CEREALES Y SAL.

En la imprenta de José Manuel Ramos, calle de Colon número 16, se despachan los impresos para la confeccion del reparto de dicho impuesto, con arreglo al modelo oficial y rayado, conteniendo cada pliego 100 lineas. Hay impresos para la lista cobratoria en igual forma

Inmediato a la estacion de la via férrea del Puente de Orense, confinando con la casa núm. 3, a voluntad de su dueño se venden cuatro solares. En la referida casa enterarán.

YA NO SE COSE A MANO

"SINGER"

garantiza sus legítimas máquinas para coser.

A propuesta de los representantes de

LA COMPANIA FABRIL

"SINGER"

varios Ayuntamientos, Diputaciones provinciales y Juntas de Instruccion pública, han autorizado a las professoras de los colegios de niñas a su cargo para incluir en el presupuesto de material el importe de una máquina para coser. Tan respetables corporaciones han tomado en cuenta el beneficio que reportará la instruccion de las jóvenes en el manejo de tan necesario aparato; puesto que dentro de poco tiempo podrá contarse con un gran número de ellas dispuestas para presentar en el mercado los artículos de confeccion en las múltiples formas de este ramo, reemplazando al penoso trabajo manual con el fácil y perfecto de la máquina.

Las máquinas de

LA COMPANIA FABRIL

"SINGER"

han sido adoptadas para los trabajos oficiales, como construccion de uniformes, etc., por los gobiernos de Inglaterra, Francia, Rusia, Estados Unidos y otros países.

VÉNDENSE A PLAZOS

desde 10 REALES semanales.

sin entrada ni aumento alguno en los precios.

10 POR 100 AL CONTADO.

Máquinas para familia e industriales y para toda clase de costura.

Pidanse Catálogos ilustrados, con listas de precios y las condiciones de venta a plazos, en el

Depósito de esta provincia.

ORENSE, PAZ, 30, ORENSE.

ORENSE: IMP. DE JOSÉ M. RAMOS.